

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinte (2020).

Auto Interlocutorio

MAGISTRADA PONENTE: ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - IMPUESTO
EXPEDIENTE:	76001-23-33-000-2020-00108-00
DEMANDANTE:	DALIA MARINA MUÑOZ (Apoderado JAIRO DONNEYS NARVAEZ Daliadeprimavera1@hotmail.com)
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
ASUNTO	Rechaza demanda respecto de la vigencia 2008 y admite las pretensiones del acto que negó la prescripción del IPU de las vigencias 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Expediente digital.

RECHAZA UNAS PRETENSIONES Y ADMITE LA DEMANDA

I.Publicidad.

Se informa a las partes que las actuaciones procesales subsiguientes en este proceso se surtirán conforme a lo dispuesto por el **Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020**. El despacho creara en *SharePoint* el expediente digital con la demanda y sus anexos, y todas las actuaciones del proceso y compartirá el vínculo para la notificación al demandado.

II. Impulso.

Correspondería a la ponente pronunciarse sobre la demanda instaurada en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, a fin de verificar si la misma cumple los requisitos legales, para ser admitida, pero observa que algunas pretensiones deben ser rechazadas, por lo que se hará pronunciamiento por sala de decisión.

1. la demanda.

La señora Dalia Marina Muñoz, a través de apoderado judicial, solicitó la nulidad de los siguientes actos administrativos:

- Resolución No. 4131.032.9.5.449392 del 13 de septiembre de 2019 (fls. 105 a 108) que negó la solicitud de prescripción del Impuesto Predial Unificado por las vigencias 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 de los predios O069600020000 y O069600010000.
- Resolución No. 4131.032.9.5.453503 del 17 de octubre de 2019 (fls 114 a 116) que resolvió el recurso de reposición, confirmándola en todas sus partes.

Como restablecimiento del derecho, pidió declarar que no está obligada a pagar el Impuesto Predial Unificado - IPU de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 respecto de los predios O069600020000 y O069600010000; y se



Radicación : 76001-23-33-000-2020-00108-00
Medio de control : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - IMPUESTO
Demandante : DALIA MARINA MUÑOZ
Demandado : DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

2

reconozcan perjuicios morales ocasionados con la expedición de los actos administrativos demandados.

2. Jurisdicción y competencia.

Conforme a los artículos 104 y 152 del CPACA, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa y de los *“De los que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales, cuando la cuantía sea superior a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”*

En el presente asunto se pretende la nulidad del acto administrativo que negó la solicitud de prescripción del Impuesto Predial Unificado para las vigencias 2008, 2009, 2010 a 2013 y 2014 de los predios O069600020000 y O069600010000, actos expedidos por el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, razón por la cual esta Corporación es competente para conocer del presente asunto, como quiera que se discute un acto administrativo producto de un impuesto.

3. Factor territorial.

El numeral 2 del artículo 156 del CPACA en cuanto a la competencia territorial señala: *“En los de nulidad y restablecimiento se determinará por el lugar donde se expidió el acto, o por el del domicilio del demandante, siempre y cuando la entidad demandada tenga oficina en dicho lugar.”*

En el presente asunto, se observa que las Resoluciones acusadas fueron proferidas por el Departamento Administrativo de Hacienda del Municipio de Cali, además el domicilio de la demandante se encuentra en el mismo municipio, por tal razón se encuentra debidamente configurada la competencia por el factor territorial en el presente asunto.

4. Acumulación de pretensiones.

Se pide la nulidad de la resolución No. 4131.032.9.5.449392 del 13 de septiembre de 2019, que negó la petición de prescripción del IPU por las vigencias 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 de los predios O069600020000 y O069600010000.

Si bien se trata de un acto administrativo, lo cierto es que su control judicial implica una acumulación de pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho porque se pide la prescripción del IPU de siete vigencias.

A juicio de la sala ello impone estudiar de manera individualizada el contenido de la respuesta del Departamento de Hacienda Municipal frente a cada de una de las vigencias sobre las cuales se solicitó la prescripción, de lo cual se resalta:

i). Para la vigencia 2008 del predio O069600010000, la Administración Municipal señaló que en razón a la existencia de la liquidación oficial de revisión No. 4131.1.12.6.201360484 del 01 de octubre de 2013, notificada el 29 de



Radicación : 76001-23-33-000-2020-00108-00
Medio de control : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - IMPUESTO
Demandante : DALIA MARINA MUÑOZ
Demandado : DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

3

diciembre de 2013 y debidamente ejecutoriada el 01 de marzo de 2014, se libró mandamiento de pago No. 4131.3.21.30817 del 05 de mayo de 2015, notificado el 23 de octubre de 2018, conforme al artículo 175 del Decreto 139 de 2012, con lo cual se interrumpió la prescripción.

ii). Para la vigencia 2008 del predio 0069600020000, la Administración Municipal señaló que en razón a la existencia de la liquidación oficial de revisión No. 4131.1.12.6.201360600 del 01 de octubre de 2013, notificada el 23 de diciembre de 2013 y debidamente ejecutoriada el 24 de febrero de 2014, se libró mandamiento de pago No. 4131.3.21.81207 el 10 de noviembre de 2016, notificado el 23 de octubre de 2018, conforme al artículo 175 del Decreto 139 de 2012, con lo cual se interrumpió la prescripción.

iii). Para las vigencias 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 de los predios 0069600020000 y 0069600010000 la Subdirección de Tesorería Municipal emitió órdenes de mandamiento de pago oportunas que se encontraban en etapa de notificación personal, por lo cual no procedía decretar la prescripción.

iv). Para la vigencia 2014 de los predios 0069600020000 y 0069600010000, existían liquidaciones oficiales debidamente ejecutoriadas y estaba en tiempo de proferir y notificar el mandamiento de pago para hacer efectivo el cobro de la obligación tributaria para esa vigencia.

5. Control jurisdiccional de los actos acusados.

El artículo 92 de la Ley 1437 establece que, cuando el interesado se oponga a la ejecución de un acto administrativo alegando que ha perdido fuerza ejecutoria, quien lo produjo podrá suspenderla y deberá resolver dentro del término de 15 días. El acto que decida la excepción no será susceptible de recurso alguno, pero podrá ser impugnado por vía jurisdiccional.

A su turno, el artículo 101 del mismo estatuto, dispone en el ámbito del deber de recaudo y prerrogativa de cobro coactivo, solo serán demandables ante la jurisdicción los actos administrativos que deciden las excepciones, los que ordenan llevar adelante con la ejecución y los que liquiden el crédito.

Jurisprudencialmente se admite que también es pasible de control judicial el auto que resuelve de fondo la solicitud de prescripción de la obligación cuando es acto administrativo definitivo que resuelve en el fondo sobre una situación jurídica particular y concreta del administrado¹. Dijo el Consejo de Estado:

“En el caso particular, se advierte que el acto demandado no se profirió en el trámite del proceso administrativo coactivo, sino que fue el resultado del derecho de petición en el que la demandante solicitó declarar la prescripción de la acción de cobro de una serie de obligaciones que tenía a su cargo, en calidad de deudora solidaria de la sociedad PAPELFA Ltda. Esa petición provocó un pronunciamiento de la administración, en el que se resolvió de fondo la situación particular de la demandante y, sin duda, es un acto administrativo pasible de control judicial. Es cierto que las prescripciones de la acción de cobro, pedidas en el derecho de petición en cuestión, bien podían presentarse como excepciones en los respectivos procesos de cobro, pero también lo es que, al resolver dicha petición, la DIAN debió informarle a la actora que esa no era la vía legal para intervenir y, asimismo, debió abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo. Empero, como

¹ CE. Sección Cuarta Rad. 25000-23-27-000-2006-01246-01 (17105), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.



Radicación : 76001-23-33-000-2020-00108-00
Medio de control : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - IMPUESTO
Demandante : DALIA MARINA MUÑOZ
Demandado : DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

4

se pronunció de fondo, se debe concluir que esa respuesta contiene una decisión de fondo que afecta de manera concreta la situación de la demandante y, por lo tanto, es susceptible de demandarse en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En efecto, contrario a lo señalado por la DIAN, el oficio mencionado responde de fondo y de manera definitiva la situación de la señora Gloria Esperanza Rodríguez, en el sentido de negar la solicitud de prescripción de la acción de cobro. Contra esa decisión, se insiste, se podía instaurar directamente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción, por tratarse de un acto administrativo de contenido particular, dado que la DIAN no dio la oportunidad de interponer los recursos (artículo 135 del C.C.A.)”.

En el caso objeto de estudio la señora Dalia Marina Muñoz pide la nulidad del acto administrativo que le negó la prescripción de la obligación tributaria derivada del impuesto predial de dos predios, por las vigencias 2008 a 2014.

Empero, en lo que respecta al año 2008 la administración no emitió una decisión de fondo, pues se limitó a informarle que libró mandamiento de pago y lo notificó en 2015, dando inicio al cobro coactivo.

En ese escenario, el administrado debe proponer la excepción de prescripción y ejercer su defensa al interior del mismo, y, solo podrá demandar ante la jurisdicción el acto administrativo que decida desfavorablemente la excepción.

De lo contrario, se daría lugar a un doble juicio de legalidad con el riesgo de fallos inhibitorios, que están proscritos.

Así las cosas, frente a la solicitud de prescripción del IPU de la vigencia 2008 de los predios O069600020000 y O069600010000, la Sala rechazará la demanda.

No ocurre lo mismo respecto de la solicitud de prescripción de las vigencias 2009, 2010 a 2013, en las que se emitió una decisión de fondo, negando lo pedido, tras indicar que a pesar de haberse proferido mandamiento de pago no se ha surtido el trámite de la notificación; y frente a la vigencia 2014, en la que se negó lo pedido y se dijo que no se ha librado mandamiento de pago.

6. Factor Cuantía.

El artículo 157 del CPACA respecto a la competencia por razón de la cuantía señala:

“ARTÍCULO 157. COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.

Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.

(...)

La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.”



Radicación : 76001-23-33-000-2020-00108-00
Medio de control : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - IMPUESTO
Demandante : DALIA MARINA MUÑOZ
Demandado : DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

5

Sobre el particular, el Consejo de Estado ha precisado lo siguiente²:

“(…) De acuerdo con las normas transcritas, con la entrada en vigencia de la Ley 1437, esto es, a partir del 12 de julio de 2012, se hace necesario determinar en materia tributaria el objeto del proceso con el fin de establecer la competencia funcional del Juez o Tribunal, ya que si el asunto versa sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales, su conocimiento radica en los Tribunales Administrativos si la cuantía supera los 100 salarios mínimos, mientras que si es inferior a esta su conocimiento en primera instancia radica en los Juzgados Administrativos.

La regla de competencia explícita que se comenta trata únicamente del tributo, no de la sanción, lo que, en principio permite excluir de la regla de competencia específica a las controversias que versen sobre sanciones, caso en el cual se acude a la regla general consagrada en el artículo 152-3, que la radica en los Tribunales Administrativos cuando la cuantía supera los 300 salarios mínimos, mientras que si es inferior a esta suma su conocimiento en primera instancia se radica en los Juzgados Administrativos, conforme al artículo 155-3 ibídem.

Se dice que, en principio, porque dicha regla es clara cuando la pretensión ataca únicamente la sanción, como sucede en este caso donde el acto administrativo sólo impuso la multa. Cuestión diferente sería la pretensión que versa sobre el impuesto mismo y la sanción, pero en tal caso debe tenerse presente que la cuantía se establece por la sumatoria del valor discutido por concepto del impuesto y las sanciones –artículo 157 Ley 1437- o por aplicación de la regla especial determinada en función del impuesto, no de la sanción, pero este no es el caso que se trata. (…)

(…) En ese orden de ideas, se concluye que con la Ley 1437 el Legislador fijó dos Reglas de competencia en materia tributaria. La regla especial para los procesos en los que se discuta el monto, la distribución o asignación de impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales, municipales o distritales -100 salarios mínimos- y, la regla general, para los procesos en los que se impugnen otro tipo de actos administrativos en uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho -300 salarios mínimos-; por lo que es necesario para determinar la competencia en cada caso, un análisis de las pretensiones y de los fundamentos de la demanda para efectos de establecer el asunto del proceso. (…)”

De acuerdo con la norma transcrita, como en este caso se acumulan varias pretensiones, la de mayor valor será la que determinará la cuantía del asunto.

En este caso, la mayor pretensión es \$174.127.532 pesos, que corresponden a la suma del IPU para la vigencia del año 2014 por los predios O069600020000 y O069600010000, que supera los 100 SMLMV³.

Por tanto, esta Corporación es competente para conocer el proceso en primera instancia.

7. Conciliación prejudicial.

El artículo 161.1 del CPACA impone: *“Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.”*

El parágrafo 1º del artículo 2º del Decreto 1716 de 2009⁴ consagra:

² Consejo de Estado, Sección Cuarta, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, providencia del 01 de octubre de 2013, EXP No. 25000-23-27-000-2013-00290-00(20246).

³ Salario año 2020 = \$ 877.802 x 100 = \$ 87.780.200 pesos.

⁴ Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001.

“ARTÍCULO 2°. ASUNTOS SUSCEPTIBLES DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. (...)

Parágrafo 1°. No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo:

– Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario.

– Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993.

– Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado.”

(Subraya fuera de texto).

Por lo anterior y al tratarse de un asunto de carácter tributario por discusión de impuestos, no es requisito de procedibilidad la conciliación prejudicial.

8. Caducidad de la acción.

Respecto de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA dispone: *“2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (...) d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales.”*

La Resolución No. 4131.032.9.5.453503 del 17 de octubre de 2019, que resolvió el recurso de reposición, fue notificada a la demandante el 17 de octubre de 2019, por lo que los cuatro (04) meses del medio de control vencían el 18 de febrero de 2020 y como la demanda fue presentada el 13 de febrero de 2020⁵, es oportuna.

9. Poder y legitimación.

La legitimación por activa es la facultad que tiene aquella persona que ha sufrido un daño para obtener el resarcimiento por medio de la jurisdicción contenciosa administrativa.

Respecto al derecho de postulación, el artículo 160 del CPACA señala que: *“Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa.”*; a folios 87 a 88 obra poder otorgado por la parte demandante.

En el caso de autos, la actora, por conducto de apoderado, pide la nulidad del acto que le niega la prescripción de una obligación tributaria, por tanto, existe legitimación por activa y derecho de postulación.

Respeto a la legitimación por pasiva y la representación de las entidades públicas el artículo 159 del CPACA dispone: *“Las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados.”*

En este caso se pide la nulidad de un acto administrativo proferido por el Distrito Especial de Santiago de Cali (Departamento de Hacienda Municipal) por tanto

⁵ Ver folio 178



Radicación : 76001-23-33-000-2020-00108-00
Medio de control : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - IMPUESTO
Demandante : DALIA MARINA MUÑOZ
Demandado : DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

7

está acreditada la legitimación por pasiva. La entidad deberá concurrir al proceso a través de apoderado.

10.Requisitos formales.

Salvo lo expuesto en precedencia, la demanda cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los artículos 162 (requisitos de la demanda⁶) 163 (individualización de pretensiones⁷) y 164 (oportunidad de la demanda) de la Ley 1437 de 2011.

Además, se allegaron los anexos pertinentes que exige el art. 166, incluyendo copia de la demanda en mensaje de datos para los efectos del inciso 3 del art. 199, modificado por el art. 612 de la Ley 1564 de 2012.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle, Sala de Decisión,

RESUELVE:

PRIMERO: RECHAZAR la demanda de **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**, instaurada por la señora **DALIA MARINA MUÑOZ** contra el **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL**, para obtener la declaratoria de prescripción del IPU de la vigencia 2008 de los predios O069600020000 y O069600010000, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: ADMITIR la demanda de **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**, instaurada por la señora **DALIA MARINA MUÑOZ** contra el **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL**, para obtener la declaratoria de prescripción del IPU de las vigencias 2009, 2010 a 2013 y 2014 de los predios O069600020000 y O069600010000.

TERCERO: NOTIFICAR este auto por estados a la parte demandante, quien podrá consultarlo en la página web: www.ramajudicial.gov.co.

CUARTO: ABSTENERSE de fijar gastos ordinarios del proceso; no obstante, de requerirse expensas, se fijarán en su oportunidad.

QUINTO: NOTIFICAR personalmente la presente providencia al Distrito Especial de Cali y al señor **AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO**, a los buzones de correos electrónicos creados por dichas entidades para efecto de recibir notificaciones judiciales. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 806 de 2020, la notificación se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje.

SEXTO: CREAR en SharePoint el expediente digital con la demanda, sus anexos y el acta de reparto. **Con la notificación del auto se insertará el vínculo para consultar el expediente digital en SharePoint.**

⁶ Designación de las partes: folios 1-3

Pretensiones: folios 3-7

Los hechos y omisiones folios 7-14

Fundamentos de Derecho y concepto de violación folios 14-78

Las pruebas folios 78-84, estimación razonada de la cuantía folio 85

Lugar y dirección de las partes folios 85-86

⁷ Folios 3-7

SÉPTIMO: CORRER traslado de la demanda a los demandados, por el término de treinta (30) días para contestarla, proponer excepciones, pedir pruebas, llamar en garantía y en su caso, proponer demanda de reconvención, acorde con el artículo 172 del CPACA. Este plazo comenzará a correr al vencimiento del término común de veinticinco (25) días después de surtida la última notificación, como dispone el artículo 199 del CPACA.

OCTAVO: ORDENAR a la entidad demandada, que, durante el tiempo para dar respuesta a la demanda, deberá allegar con la contestación, **el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación que se demanda y se encuentre en su poder**. La inobservancia de este deber constituye falta disciplinaria gravísima del funcionario encargado del asunto (artículo 175, parágrafo 1º del CPACA).

NOVENO: ADVERTIR a los sujetos procesales que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 806 de 2020, la contestación de la demanda y demás memoriales que se presenten durante el trámite del presente proceso, deberán presentarse al correo electrónico de la secretaria rpmemorialestadmvc Cauca@cendoj.ramajudicial.gov.co, con copia a los correos electrónicos de los demás sujetos procesales. **De igual forma, se hace necesario que en los memoriales y correos que envían, se identifique con claridad el NÚMERO DE RADICADO DEL PROCESO CON LOS 23 DÍGITOS SEPARADOS POR GUIÓN, NOMBRE DEL MAGISTRADO PONENTE, NOMBRE DEL DEMANDANTE y EL ASUNTO.**

DÉCIMO: RECONOCER al abogado JAIRO DONNEYS NARVAEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.375.782 y con tarjeta profesional No. 87.197 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la parte actora, en los términos y para los efectos a que alude el memorial poder presentado.

La decisión adoptada en la presente providencia fue discutida y aprobada en Sala Virtual de la fecha, según consta en acta de que se entrega a la Secretaría de la Corporación por medios virtuales, atendiendo las circunstancias de salubridad públicas que se presenta en el país a raíz del COVID- 19.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE


ANA MARGOTH CHAMORRO BENAIDES
Magistrada


ZORANNY CASTILLO OTALORA
Magistrada


VÍCTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DÍAZ
Magistrado